

REPORTAJE

Goteo de promesas

Los pueblos de Castilla-La Mancha también necesitan el agua de su tierra

LA TRIBUNA / CIUDAD REAL

El pasado mes de septiembre terminó el plazo de presentación de iniciativas para la elaboración del Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha, que ha promovido la Consejería de Agricultura presentándolo a las distintas organizaciones agrarias, asociaciones ciudadanas y partidos políticos, con el fin de presentar un documento de consenso al nuevo Ministerio para la Transición Ecológica y Cambio Climático, cuyo objetivo es que la voz de esta comunidad autónoma sea escuchada en la Administración Central a la hora de tomar decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos de las distintas cuencas hidrográficas que pasan por su territorio y que, al ser interterritoriales, no tiene autoridad, como son las del Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y, en menor medida, Guadalquivir.

«El problema de nuestra comunidad autónoma es que no tiene competencia en la administración de los recursos de los ríos más importantes que pasan por su territorio, pero además tampoco tiene representación en los órganos de decisión». Así lo explica el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, cuando el gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a recurrir un nuevo trasvase de agua del Tajo al Segura y añade que «llevar agua del Tajo al Segura cada mes no es la forma de hacer política del agua, sobre todo, ignorando a los pueblos ribereños del Alto Tajo, que carecen de representación. Por eso queremos que con este pacto regional, Castilla-La Mancha se presente ante el Ministerio con una única voz para que nuestra región esté presente en todos los órganos de decisión que le afecta».

Para la Consejería, la redacción del Pacto Regional del Agua y la creación de la Federación Regional de Regantes y Usuarios pueden ser definitivos para defender el desarrollo de Castilla-La Mancha. «Creo que van a ser dos elementos fundamentales para que cuando llegue otro periodo de sequía, nuestra región esté preparada y bien representada para defender sus intereses».

Aunque todos los meses se produce una derivación de agua desde el Tajo al Segura, que provoca titulares en los medios de información, la zona del Alto Guadiana que se extiende por la meseta manchega, arrastra décadas de restricciones desde la declaración de sobreexplotación del acuífero 23 en 1987, que desencadenó importantes restricciones y severas sanciones a la población de una treintena de municipios eminentemente agrícolas. La concepción del regadío como solución a la precaria situación económica de estos pueblos, junto a la creencia de que el acuífero era un mar de agua inagotable, así como la proliferación posterior de nuevas perforaciones, desembocó en el inventario de más de cinco mil pozos irregulares, cuya solución debía pasar por su inventariado oficial. El Plan Especial del Alto Guadiana de 2008 fue la solución convocando un proceso de regularización de explotaciones agrarias, que no pudo culminarse totalmente, quedando aún hoy más de 1.000 pozos sin legalizar, pendientes de una respuesta tras aquella convocatoria y cuyos expedientes duermen durante una década el sueño de los justos.

Este año 2018, el cambio de presidente en la Confederación del Guadiana ha abierto otro periodo de ilusión para ese millar de agricultores. «Yo vuelvo a tener motivos para la esperanza», señala el consejero Martínez Arroyo. «Y ya he mantenido reuniones con el nuevo presidente encaminadas a la regularización de todas las extracciones de agua».

El nuevo presidente de la Confederación del Guadiana, Samuel Moraleda, ya ha celebrado una primera reunión con las comunidades de regantes de las masas subterráneas de agua del Alto Guadiana, a las que ha manifestado la necesidad de poner orden en la situación de todas las explotaciones agrarias. «Hay voluntad para reordenar la situación en el Alto Guadiana que nos lleve a alcanzar la sostenibilidad medioambiental y económica de todos los municipios de la zona», señala Moraleda. Los regantes son conscientes de ello y saben que hay que hacer un gran esfuerzo para el mantenimiento del futuro de la comarca, recuperando la eficacia en el control de los caudales



Conducción del trasvase Tajo-Segura. / REYES MARTÍNEZ

metros, la reordenación de los derechos pendientes de regulación y la reducción de las extracciones».

En cuanto al presidente provisional de la nueva Federación Regional de Regantes, Herminio Molina, que representa a 50.000 regantes y usuarios, considera también que «una Federación Regional de Regantes permitirá que los intereses de Castilla-La Mancha sean escuchados. Creo que desde la federación se contará con nosotros para debatir sobre políticas de agua, cuyos beneficios son para la sociedad. Porque el 90 por ciento de los recursos hídricos que utilizamos son para la agricultura, sirven para el mantenimiento y desarrollo de los núcleos de población rural, pero no son para nosotros. Se utilizan para alimentar a la sociedad», advirtió.

LA FEDERACIÓN DE
REGANTES RECUERDA
QUE EL 90% DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS SE
USAN EN LA REGIÓN
PARA LA AGRICULTURA